

Osorno, veintiséis de julio de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En esta causa **RIT O-73-2024** compareció doña **VALESKA ANDREA OLGA DELGADO DIOCARES**, chilena, fonoaudióloga, cédula nacional de identidad N° 15.844.319-8, domiciliada en calle Eusebio Lillo N° 311, de la ciudad de Osorno, interponiendo demanda en contra de la **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**, del giro de su denominación, Rol Único Tributario N° 71.551.500-8, representada legalmente por don Eugenio Larraín Hernández, Docente de Educación Superior, cédula nacional de identidad N° 6.924.173-5, ambos domiciliados, para estos efectos, en calle Los Carrera N° 753, de la ciudad de Osorno. Entabla acción de despido injustificado. En cuanto a los hechos dice que el 01 de marzo de 2013, la demandante es contratada por la demandada, iniciando la prestación de servicios bajo subordinación y dependencia, ejerciendo funciones, a la época del despido como “*Directora de Carrera*” de la Escuela de Fonoaudiología, en la sede Osorno de la Universidad Santo Tomás. En el ejercicio de las funciones inherentes al cargo antes referidos, la demandante debía ejecutar consistían básicamente en ejecutar e implementar el Plan de Desarrollo de Facultad y del Plan de Sede en lo relativo a su carrera (Fonoaudiología), promocionando e implementando los programas académicos definidos, asegurando el cumplimiento de los estándares académicos, velando por la mejora continua de los indicadores de resultado académico establecidos por la Facultad, conformando un cuerpo académico de planta y adjunto adecuado a los requerimientos disciplinarios, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos para la carrera en la sede. Es del caso que durante los más de 10 años en los que la actora sirvió para la demandada, siempre se desempeñó siguiendo los más altos cánones de excelencia tanto en los que compete a su profesión como también en lo relativo a las relaciones interpersonales con sus colegas y alumnos. Hace presente que durante todo el tiempo en el que el actora prestó servicios jamás fue amonestada de forma verbal ni escrita por cuestiones que digan relación con su desempeño profesional, sino todo lo contrario, toda vez que siempre fue reconocida como un buen elemento, una persona comprometida con la institución y sus valores, y con el cumplimiento de los objetivos de la unidad a la que pertenecía. Del mismo modo, la carrera académica de la actora, al interior



de la macro unidad en la que se desempeñó fue, por lo menos, destacada, siendo una de las únicas docentes de la sede Osorno con estudios de doctorado en su disciplina, destacando su compromiso con la extensión, vinculación con el medio y la investigación científica. En lo relativo a su jornada de trabajo, la actora prestaba servicios sin limitación a control horario, ello por una extensiva e indebida aplicación del inciso 2° del artículo 22 del Código del Trabajo. En lo relativo a la remuneración mensual, para los efectos del artículo 172 del Código del Trabajo, aquella asciende a la suma de \$2.356.346. En cuanto al término de la relación laboral dice que a pesar que la actora cumplió de forma satisfactoria la totalidad de las funciones para las que fue contratada, el 28 de diciembre de 2023 fue despedida, por una improcedente aplicación de la causal contenida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo. Transcribe el aviso de término de contrato. Dice que es posible apreciar que la carta de aviso de término de contrato de trabajo entregada por parte de la demandada a la actora no expresa hechos objetivos en los que se fundamenta el despido del que fue objeto la actora, ni tampoco contiene una indicación precisa que dé cuenta de las razones que la llevan a terminar su vínculo laboral, cuestión que afirma, entre otras, por las siguientes consideraciones: 1. según se indica, la demandada se encuentra enfrentada a un plan de cierre de la sede Osorno, basado en la baja sostenida de las matriculas en las carreras dictadas por la institución de educación superior demanda en estos autos. Refiere que a partir de lo anterior, a contar del año 2021, se suspendió la matrícula de alumnos para el año 2022, iniciando mesas de trabajo a fin de analizar el futuro de la sede, lo que, según la carta, se plasmaría en un informe cuyas conclusiones no se expresan en la misiva de término de contrato. Agrega que la institución tuvo problemas de gestión para conseguir campos clínicos para las carreras de salud y dificultades para estructurar una plana docente con estudios de doctorado. Agrega un conjunto de consideraciones en torno a la situación económica del país y a los recursos de la Universidad. En efecto la carta nada indica respecto a la situación particular de la unidad académica liderada por la actora, la que sigue en funciones, ya que, tal como nuestro ordenamiento jurídico lo exige, los alumnos matriculados a la época de la decisión de cierre de la sede Osorno, tienen derecho a culminar su plan de estudios. Por otro lado, las razones esgrimidas por la demandada, nada empecen a la actora, sino más



bien dicen relación con la poca o nula capacidad de gestión institucional de las propias autoridades administrativas de la Universidad Santo Tomás, a nivel central y local. Que, en lo relativo a la construcción de una plana académica con estudios de postgrado, la actora era precisamente, una de las docentes más capacitadas de la sede Osorno, con estudios de postgrado en universidades extranjeras, encontrándose pronta culminar sus estudios de doctorado. Del mismo modo, no existe indicador o parámetro objetivo informado en la respectiva comunicación de despido, que indique la necesidad de hacer dichas modificaciones, y porque ellas deben impactar la estabilidad en el empleo de la demandante, quien, por lo demás, presta servicios en una de las áreas que aún sigue funcionando dado que aún restan alumnos por culminar sus planes de estudio, y la actora era la última docente de planta o adjunta de la carrera, por lo que, debía necesariamente acompañar a dichos estudiantes en las últimas etapas de su formación. Hace presente que la razón que subyace al despido fue la negativa de mi representada, en orden a suscribir un anexo de contrato, presentado días antes del despido, en el que la demandada, unilateralmente le ofrecía reducir sustancialmente sus remuneraciones. Por otro lado, la mera indicación del cierre de la sede Osorno, no es una condición suficiente dotar de aplicabilidad a la causal esgrimida, por cuanto ella implica una decisión discrecional de la empleadora, la que, ciertamente no opera de pleno derecho, dado que la institución sigue, y seguirá operando tanto como Universidad, como Centro de Formación Técnica (en Osorno y en el resto del país), espacios donde la demandante pudo haber ejecutado funciones tanto en el área de la docencia de pre o post grado, investigación, extensión y gestión. En síntesis, los vagos enunciados indicados por la demandada en la comunicación de término de contrato antes trascrita, no son otra cosa que una copia parcial de la norma legal en la que se ampara el improcedente despido, junto con una exposición sobre directrices organizacionales adoptadas discrecionalmente por la demandada, lo que junto con no cumplir con el estándar exigido por nuestra legislación, no permite que la actora ni siquiera pueda articular una línea argumentativa destinada a controvertir, aún en esta instancia, los reales motivos y presupuestos del despido materia de autos. Hace presente, que el 10 de enero de 2024, la demandante concurrió ante don Sebastián Sadá Aznar, Notario Titular de la Primera Notaría de Osorno, y suscribió el documento



denominado “*finiquito de contrato de trabajo*”, en el, luego de percibir las sumas irrevocablemente ofertadas en la carta de despido, estampó la siguiente reserva de derechos: “*Me reservo el derecho a Reclamar Administrativamente y a interponer la acción judicial por tutela de derechos fundamentales, despido indebido, improcedente o injustificado y cobro de prestaciones laborales, por no ser efectivos los hechos descritos en la carta de despido cuya causal no es procedente. Del mismo modo, me reservo el derecho a reclamar el pago de los incrementos legales del caso, feriado legal y proporcional reembolso del descuento AFC indebidamente efectuado, premios, bonos, asignaciones, remuneraciones, diferencias por errónea determinación de las bases de cálculo, así como todo otro concepto o prestación a la que tenga derecho*”. En cuanto a las consideraciones jurídicas. Respecto al despido improcedente, invoca y transcribe el artículo 7 del Código del Trabajo. Así las cosas, teniendo presente la naturaleza contractual de la relación laboral, el legislador, en el título V del Libro I del Código del Trabajo, regula en extenso las causales, formalidades y consecuencias asociadas a la terminación de esta especial forma de vinculación jurídica entre particulares. En el caso de marras, el demandado fundamentó el despido en la causal contenida en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, que transcribe. Invoca y transcribe el artículo 162 del código del ramo. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. La jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, siguiendo las directrices normativas y la doctrina más autorizada en la materia, han ido construyendo el principio, en virtud del cual, la causal de “*necesidades de la empresa, establecimiento o servicio*”, se basa en la idea de que el despido debe asociarse a una causa de naturaleza objetiva, y que jamás se puede amparar en la mera voluntad unilateral y discrecional del empleador, por ello la exigencia de fundamentación, que permita al trabajador despedido, saber con precisión, cuáles son las razones que en definitiva justifican o hacen indispensable su separación de la empresa. En la especie, el tribunal podrá apreciar, de modo patente, con la carta de aviso de término entregada a la actora, que no existe antecedente alguno que permita satisfacer el estándar normativo, relativo a la justificación de la causal de despido invocada, ni en lo que respecta a los hechos que darían cuerpo a la misma, ni en lo relativo a la forma en que aquellos harían indispensable la separación de uno o más trabajadores, entre ellos, la



demandante. Lo anterior no es un cuestión baladí por cuanto el legislador ha establecido, en el plano procesal, que el empleador no podrá alegar, en el contexto de juicios seguidos en su contra por despidos, hechos diversos a los contenidos en la respectiva misiva exigida de conformidad al artículo 162 del Código del Trabajo, cuestión que en la especie, implica básicamente que el demandado de autos no podrá rendir prueba de ninguna naturaleza, dado que la carta entregada, carece de hechos específicos que fundamenten el despido del cual fue objeto la actora (artículo 454 N° 1 inciso 2°). Así las cosas, el legislador, poniéndose en el lugar de trabajadores cuyos vínculos contractuales han terminado, de un modo contrario a derecho, habilitó la posibilidad de concurrir ante el tribunal, a fin de que declare tal situación, y condene al empleador al pago de las indemnizaciones y recargos que procedan. Lo anterior, tiene su correlato normativo en la disposición contenida en el artículo 168 del Código del Trabajo, que transcribe. Respecto al reembolso del descuento efectuado por aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 19.728 dice que el seguro de desempleo establecido en la ley N° 19.728, obliga al trabajador a cotizar para su cuenta individual de cesantía el 0,6% de sus remuneraciones y al empleador aportar el 1,6% de su cargo. Este último además de cotizar el porcentaje señalado, debe cotizar de su costo, para un fondo solidario de cesantía el 0,8% de la remuneración del trabajador, fondo que se complementa con el aporte de 18.816 UTM que mensualmente hará el Estado. Invoca y transcribe el artículo 13 de la ley 19.728. En otras palabras, la eventual indemnización por años de servicios a que tendría derecho el trabajador en el caso de ser despedido por alguna de las causales contenidas en el artículo 161 del Código del Trabajo, no se ve afectada, pero se imputa a esta indemnización la parte del saldo de la cuenta individual de cesantía constituida por las cotizaciones efectuadas por el empleador (1,6% de la remuneración mensual) más su rentabilidad, deducidos los costos de administración que correspondan. De esta manera, el empleador se encuentra facultado para descontar de la indemnización por años de servicio la parte correspondiente al 1,6% que se ha aportado a la cuenta individual del trabajador. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Cuarta Sala de la Excma. Corte Suprema de Justicia, ha dictado abundante jurisprudencia reiterando esta interpretación, y consecuentemente ha expuesto de modo categórico sus



argumentos sobre los que construye el principio general en virtud del cual, declarado injustificado el despido del que fue objeto un trabajador, el descuento del aporte del empleador a la cuenta individual de seguro de cesantía del trabajador, pierde su fundamento básico, deviniendo en ilícito, por lo cual procede su íntegra devolución al trabajador afectado. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. En cuanto a las prestaciones demandadas: 1) incremento de la indemnización por años de servicio, según lo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, que corresponde a un 30% de dicha indemnización, lo que alcanza la suma de \$7.775.942; 2) devolución del descuento por las cotizaciones efectuadas por el empleador en la cuenta individual por cesantía del demandante, ascendiente a la suma de \$4.917.666; 3) intereses, reajustes y costas. En definitiva pide tener por interpuesta demanda por despido indebido, improcedente e injustificado y cobro de prestaciones laborales, acogerla a tramitación y en definitiva declarar: A) Que el despido del demandante, materializado el día 28 de diciembre de 2023 es indebido, improcedente e injustificado; B) Que, en consecuencia, se condene a la demandada al pago de las siguientes indemnizaciones y prestaciones: 1) incremento de la indemnización por años de servicio, según lo establecido en el artículo 168 letra a) del Código del Trabajo, que corresponde a un 30% de dicha indemnización, lo que alcanza la suma de \$7.775.942; 2) devolución del descuento por las cotizaciones efectuadas por el empleador en la Cuenta Individual por Cesantía del demandante, ascendiente a la suma de \$4.917.666; 3) intereses, reajustes y costas.

Al contestar la demanda, la demandada la demandada pidió su rechazo. Niega todas las afirmaciones contenidas en la demanda. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 452 y 453 N°1 inciso 7° del Código del Trabajo, en este acto, niega, rechaza y controvierte en forma expresa, absoluta e íntegra, todos y cada uno de los supuestos hechos y afirmaciones contenidas en la demanda presentada por la actora, de modo tal que sólo corresponderá al mismo acreditar la efectividad de sus pretensiones, no pudiendo este Tribunal estimarlos —en forma total y tampoco parcial— como tácitamente admitidos. Justificación de la causal de despido invocada. Como se señala en la demanda, y se reconoce en esta contestación, el 28 de diciembre de 2023 se puso término al contrato de trabajo de la demandante por la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del



Trabajo, que transcribe. Transcribe la carta de despido. Así, la demandada dio cabal cumplimiento a la normativa laboral vigente, toda vez que invocó expresamente para poner término a la relación laboral existente la causal legal establecida en el inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, el cual transcribe. Al respecto, la demanda vagamente alude a que la misiva no habría cumplido con los estándares legales ni el suficiente fundamento tácito, señalando que la carta de aviso no expresa hechos objetivos, indicando que el área de fonoaudiología seguiría funcionando, y que no habría en la carta un indicador o parámetro objetivo que señale la necesidad de hacer modificaciones en la Institución. En cuanto a esto último, resulta menester aclarar desde ya que el cierre de la sede de Osorno no ha sido una decisión arbitraria sino más bien una medida estudiada y necesaria, así queda plasmado en la carta de aviso de fecha 28 de diciembre de 2023, firmada por la demandante e informada a la Dirección del Trabajo, que da cuenta de las razones que fundamentan la necesidad de la decisión adoptada, y en la cual se menciona el informe desarrollado por una comisión de trabajo (en adelante, la “*comisión*”), que detalla el plan de cierre de la sede de Osorno (en adelante, el “*informe*” o “*plan de cierre*”). En efecto, según lo señalado en la carta de aviso, en la sede de Osorno hubo una tendencia a la baja de su matrícula a partir del año 2018, consiguiendo en el año 2021 a solo 955 estudiantes matriculados en carreras de pregrado regular, así la sede alcanzó tan solo un 74% del cumplimiento de sus vacantes, obteniendo un déficit de casi en un 20% en la matrícula universitaria de la provincia en los últimos cinco años. Además de lo anterior, existe una dificultad para poder acceder a los campos clínicos afectando a las carreras del área de la salud y ha habido dificultades para reforzar el cuerpo académico de la sede en virtud de la baja disponibilidad de médicos en la zona, siendo este un motivo ajeno a la voluntad de la Institución. Dicha situación es no menor, puesto que tratándose mi representada de un establecimiento educacional, ciertamente uno de los pilares estructurales de su funcionamiento lo constituye el asegurar un trato de calidad a sus estudiantes, fin determinado y preciso al que se dirige toda la organización de medios personales, materiales e inmateriales de mi representada. Como consecuencia de lo relatado, en el año 2021 se decidió suspender la admisión de estudiantes nuevos para el año 2022, constituyendo la comisión antes señalada, la cual emitió el mentado Informe



y concluyó el cierre de la sede en Osorno, lo que fue comunicado por la sede a partir del mes de abril del año 2023 a la comunidad. Luego, según se observa en la tabla adjunta en la carta de aviso y en el Informe, la carrera de fonoaudiología fue la que tuvo mayores cambios en cuanto a los alumnos matriculados, ya que con respecto al porcentaje de cumplimiento alcanzó un 57% en el año 2018, registrándose 91 estudiantes matriculados, y ya en el año 2023 hubo una disminución considerable de alumnos matriculados, alcanzando la cantidad de 11 estudiantes. Es por lo anterior, que la Institución se vio en la necesidad de desvincular a los profesionales que se desempeñaban en el área de la salud, en la misma fecha en que fue despedida la actora. Así las cosas, tal como se menciona en el Informe citado en la carta de aviso, la sede de Osorno cerrará sus puertas no solo para la carrera de Fonoaudiología sino también para las otras carreras que se imparten en ella, tales como, enfermería Tecnología Médica, Psicología, Terapia Ocupacional y Kinesiología. De esta manera, actualmente se encuentran matriculados en la carrera únicamente 6 estudiantes de Fonoaudiología, quienes se mantendrán hasta su titulación a fines del presente año. Debido a lo anterior, el cargo de la demandante no fue reemplazado, ya que sus funciones fueron absorbidas por el Director Nacional de la carrera de Fonoaudiología, quien realizará aquellas actividades que sean justas y necesarias hasta el cierre. Contrario a lo expuesto en la demanda, es importante tener presente que el inciso 1° del artículo 162 del Código del Trabajo sólo impone al empleador la obligación de señalar en la carta de aviso los hechos en los cuales se funda la o las causales de despido, cuando éste invoque aquellas establecidas en los números 4, 5 o 6 del artículo 159 y en el artículo 160 del Código del Trabajo, y no cuando invoque el artículo 161 del Código del Trabajo, que transcribe. Así pues, se confunde la actora al exigir aún más hechos en los cuales se deba fundar la causal, pues aun cuando la norma legal no lo exige respecto de la causal invocada en el caso de marras, igualmente se entregaron los argumentos señalados en la misiva, tal como explica la carta, configurándose exactamente lo que describe nuestra Excma. Corte Suprema en relación al artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, resultando evidente que ello en ningún caso corresponde a la voluntad unilateral y arbitraria para efectos de maximizar sus utilidades, sino a todo lo contrario. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. Si no fuera así, se llegaría al



absurdo que una empresa jamás podría poner término al contrato de trabajo de un trabajador con derecho a indemnización, cuando se trata de una necesidad de la empresa que ha debido desarrollar un proceso interno de racionalización por razones económicas, en el cual es inevitable hacer una selección del personal a despedir. Por otra parte, de la sola lectura de la carta es posible advertir que la misma cumple en todo sentido con los requisitos del inciso 2° del artículo 162 del Código del Trabajo, y entender lo contrario sería exigir un estándar imposible de cumplir. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. En el caso de marras precisamente se presenta lo expuesto por la Corte Suprema, en el sentido de que se trata de una razón adicional, grave y exterior, cual es, principalmente la baja sostenida de la matrícula a tal punto que conllevó a la decisión de cierre definitiva de la sede de Osorno de la Universidad. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. Así las cosas, la desvinculación de la demandante es del todo justificada, dado que responde una medida contemplada en el plan de cierre que se ha venido estudiando por parte de la Universidad desde el año 2021, tal como se menciona en la misiva y en el informe citado en ella. Alega improcedencia de demandar el recargo solicitado de un 30% de la indemnización por años de servicio. Tal como se expresó en el acápite precedente, la demandada en uso de sus facultades legales puso término al contrato de trabajo de la actora invocando la causal establecida en el artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, “*necesidades de la empresa, establecimiento o servicio*”, fundada, como se explica en la carta de despido, en el plan de cierre de la sede de Osorno, dando así estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código del Trabajo, en relación con el inciso 1° del artículo 161 del Código del Trabajo. En tales condiciones, y habida consideración de los argumentos y hechos esgrimidos en el punto anterior precitado, los cuales solicitamos tener por expresamente reproducidos, en la especie se han dado los elementos necesarios para configurar la causal legal invocada por la demandada y, en consecuencia, el despido de la actora es justificado y conforme a derecho, siendo improcedente conceder el incremento legal del 30% sobre la indemnización por años de servicios solicitado por la Demandante. Alega improcedencia de lo solicitado por concepto de descuento por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía. La demandante solicita que se declare que no correspondería que se impute la



suma correspondiente a dicho aporte a la indemnización por años de servicios, y, en consecuencia, reclama el pago de la suma que fue descontada por este concepto en su finiquito, que asciende al monto de \$4.917.666. Sin embargo, el descuento efectuado por concepto de aporte del empleador al seguro de cesantía es totalmente procedente, conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 19.728. Como puede advertir en este caso se cumple con todos los requisitos que la ley exige para que proceda la imputación de los saldos aportados por el empleador a la cuenta individual de la demandante. En efecto, la demandada realizó aportes periódicos a la cuenta individual del seguro de cesantía de la actora, conforme lo señala la citada Ley, y el contrato terminó por aplicación de la causal del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, por necesidades de la empresa. Es por ello que solicita se niegue lugar a esta petición. Transcribe los artículos 13 y 52 de la citada ley. De este modo, esta disposición en concreto es la que ratifica que cualquier pago que corresponda efectuar por este concepto, debe hacerse imputando los valores ya aportados por el empleador, aún si el despido llegase a ser declarado injustificado. No concluir lo anterior, sería aplicar una sanción al empleador, que no se encuentra expresamente establecida en la Ley. Invoca y transcribe jurisprudencia judicial. En este aspecto, se hace presente que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse a todo caso en que se establezca una sanción. Entre ellos, dice dicho Excmo. Tribunal, es necesario destacar los principios de legalidad y de tipicidad, los cuales no se identifican, sino que el segundo tiene un contenido propio como modo de realización del primero. La legalidad se cumple con la previsión de delitos e infracciones y de las sanciones en la ley, pero la tipicidad requiere de algo más, que es la precisa definición de la conducta que la ley considera reprochable, garantizándose así el principio constitucional de seguridad jurídica y haciendo realidad, junto a la exigencia de una ley previa, la de una ley cierta (Sentencia de 26 de agosto de 1996. Rol 244. Considerando 9° y 10°). Por consiguiente, en cuanto a la solicitud del actor de reintegro del descuento realizado por concepto del aporte del empleador al seguro de cesantía, al no cumplir ello con los principios de legalidad y tipicidad, deberá necesariamente ser rechazada en todas sus partes, con costas. Respecto de las prestaciones



demandadas niega su procedencia. En definitiva pide el rechazo de la demanda, con costas.

En la audiencia preparatoria las partes no arribaron a conciliación.

En la audiencia de juicio la demandada acompañó los siguientes documentos: 1) contrato de trabajo entre las partes (folio 14); 2) carta de aviso de término de contrato de trabajo de 28 de diciembre de 2023 (folio 15); 3) copia de comprobante de carta de aviso para terminación del contrato de trabajo, aviso electrónico a la Dirección del Trabajo de 02 de enero de 2024 (folio 16); 4) informe que detalla el plan de cierre de la sede de Osorno del año 2023 (folio 19) ; 5) carta emitida por Universidad Santo Tomás, de 25 de enero de 2023 (folio 20); 6) carta de aviso que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña Camila Ignacia González Castillo, profesional del área de Enfermería, de 28 de diciembre de 2023 (folio 21); 7) carta de aviso que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y don Claudio Sánchez Hidalgo, profesional del área de tecnología médica, de 28 de diciembre de 2023 (folio 22); 8) carta de aviso que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña Fabiola Alejandra Velásquez Gómez, profesional del área de Psicología, de 28 de diciembre de 2023 (folio 23); 9) carta de aviso de término que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña Gabriela del Pilar Olivares Ramírez, profesional del área de Enfermería, de 28 de diciembre de 2023 (folio 24); 10) carta de aviso de término que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña Margarita Antonieta Cárcamo Lefian, profesional del área de Ciencias Básicas, de 28 de diciembre de 2023 (folio 25); 11) carta de aviso de término que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña María José Loyola Mansilla, profesional del área de Kinesiología, de 28 de diciembre de 2023 (folio 26); 12) carta de aviso de término que comunica término de contrato de trabajo, suscrita por la Universidad Santo Tomás y doña Marlis Andrea Bernales Hermosilla, profesional del área de Kinesiología, de 28 de diciembre de 2023 (folio 27).

La demandante acompañó los siguientes documentos: 1) proyecto de anexo de contrato de 02 de enero de 2024 (folio 31); 2) perfil de cargo de director de Carrera Universidad Santo Tomás (folio 32); 3) currículum vitae



de doña Valeska Delgado Diocares (folio 33); 4) certificado de licenciatura en Fonoaudiología de doña Valeska Delgado Diocares, emitido por Universidad Andrés Bello (folio 34); 5) certificado de título de Fonoaudiólogo de doña Valeska Delgado Diocares, emitido por Universidad Andrés Bello (folio 34); 6) certificado de grado académico de Magíster en Fonoaudiología con mención en Audiología, emitido por Universidad Andrés Bello (folio 34); 7) correo electrónico de aceptación en programa de Doctorado en Fonoaudiología de la Universidad del Museo Social Argentino (folio 35); 8) acta de aprobación 00031 del Comité de Ética en Investigación la Universidad del Museo Social Argentino (folio 36); 9) correo electrónico de 02 de abril de 2024, emitido por Andrea Rodríguez Pinochet (arodriguez23@santotomas.cl) a Grace Prambs (graceprambs@gmail.com) (folio 37).

La demandante solicitó exhibición de documentos, declarando que ella fue cumplida. De los documentos exhibidos acompañó los siguientes: 1) anexo de contrato de trabajo (folio 48, página 14); 2) nómina de estudiantes matriculados en la carrera de Fonoaudiología en la sede Osorno de la Universidad Santo Tomas para el año académico 2024 (folio 51).

La demandada rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de don Carlos Eduardo Sánchez Salgado y don Alexis Fabián Santibáñez Barría.

Las partes formularon observaciones a la prueba.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que en la audiencia preparatoria las partes establecieron como hecho son controvertidos los siguientes:

- 1) Que el demandado cumplió con las formalidades del despido.
- 2) Que al término del contrato de trabajo se devengó en favor de la demandante por indemnización por años de servicio la suma de \$25.919.806.
- 3) Que al suscribir el finiquito el demandado descontó la suma de \$4.917.666 por aporte patronal de AFC;
- 4) Que al momento del despido la demandante prestaba servicios de directora de la carrera de la escuela de Fonoaudiología en la sede Osorno.

SEGUNDO: Que la demandada rindió prueba testimonial consistente en la declaración de don Carlos Sánchez Salgado y don Alexis Santibáñez Barría.



Don Carlos Sánchez Salgado dijo que trabaja para la demandada es director de carrera de Kinesiología, desde el 2018 pero lleva más años en la universidad. La demandante la conoce. Era la directora de carrera de Fonoaudiología. Fue desvinculada porque tenía menos alumnos. Desde el 2022 la universidad está en cierre, les limitaron la matrícula y ha ido disminuyendo el número de estudiantes. En esa época tenía 50 alumnos y hoy tiene veinte 22, y han ido disminuyendo la planta de estudiantes. Sus estudiantes están en quinto, sexto noveno semestre y en práctica profesional (tercero, cuarto y quinto año de carrera). No maneja la estadística de la carrera de Fonoaudiología solo sabe que quedaban menos estudiantes. El comité ejecutivo de la universidad hace 2 años tomó la decisión de cerrar la universidad de Osorno y solo quedarse con el CFT y el IP, y empezó a planificar los procesos de cierre, cesando la matrícula de estudiantes y desvincular profesores. Sabe de la planificación porque fue parte del comité de cierre, ya que se invitó a dos profesores a participar. El plan de cierre se comunicó el año pasado de manera formal a toda la comunidad universitaria, estudiantes, directivos, funcionarios administrativa. Actualmente sabe que en la carrera de Fonoaudiología quedaban pocos estudiantes y estaban en práctica, pero ignora la cantidad. Un estudiante en práctica de los últimos 2 semestres de la carrera los estudiantes van a los centros de prácticas. Los estudiantes siempre tiene supervisión de sus prácticas y esas las hace el directo o jefe de carrera que establece el rol de un docente y a veces el mismo directos puede ejecutarlas y eso dependerá de los tiempos, de los espacios. La general es que el director busque un profesor para la práctica. Contrainterrogado dice que el testigo está en su puesto porque tiene asignaturas curriculares y estudiantes en práctica. Cuando dijo que se les limitó la matricula dice que no se aceptó nuevas matrículas, eso ocurrió antes del proceso de cierre, carreras de fonoaudiología y kinesiología.

Don Alexis Santibáñez Barría dijo que trabaja para la demandada en la sede Osorno hace 14 años, es director académico. Conoce a la demandante fue directora de carrera de fonoaudiología; La sede se encuentra en proceso de cierre, y la demandante no es parte de la demandada desde hace un año. La institución determinó que la sede Osorno cierre el proceso de admisión y eso ha significado que algunas personas deban ser desvinculada porque ha disminuido la cantidad de



estudiantes. Ella fue directora de la carrera de fonoaudiología. Se ha tenido que ir disminuyendo la cantidad d académicos en las distintas carreras. Las desvinculaciones partieron con reducción de académicos a honorarios porque ya o hay ingresos de estudiantes; actualmente. Luego se desvinculo al jefe de carrara y después a la demandante. Actualmente hay 7 estudiantes de fonoaudiología, actualmente no hay clases, los estudiantes se encuentran en etapa de seminario. En todos los procesos de desvinculación participo la demandante. La dirección nacional asumió ciertas funciones (Alexis León) quedó a cargo de la supervisión de las tesis y practica de los alumnos que queda. A nivel nacional existe un director nacional de la carrera y es el responsable académico de la carrera. A los estudiantes en práctica los acompaña el señor León y una académica a honorarios. La demandante no aceptó una baja en su jornada y por ellos la demandada buscó otro profesional. Tuvieron una reunión con la demandada y la decisión de mantener una media jornada y la demandante no aceptó. Actualmente la carrerea de fonoaudiología quedan 6 alumnos para el segundo semestre. Están seminario y práctica. La práctica durará el segundo semestre. Los estudiantes de fonoaudiología deben terminar este 2024. El decreto 57 de la institución dice que una carrera no puede quedar idealmente de director de carrera y lo que se busca es que la función contenga una media jornada. Después que rechazó el cambio tuvieron que organizarse con la nueva profesional a honorarios.

TERCERO: Que como consta de la carta de despido fechada el 28 de diciembre de 2023 (que rola a folio 15) el empleador demandado invocó como causal de despido de la actora, la del artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa.

En cuanto a los hechos indica lo siguiente:

- 1) Que el despido obedece al plan de cierre de la sede que la demandada dispone en Osorno.
- 2) Que desde el 2018 la sede en Osorno presenta una tendencia sostenida a la baja de su matrícula, llegando en el año 2021 a 955 estudiantes matriculados en carreras de pregrado regular; la sede alcanzó en dicho año un 74% del cumplimiento de sus vacantes, ubicándose bajo el promedio nacional e la Universidad.
- 3) Los análisis realizados por la Universidad no proyectan una mejora en el indicador, ya que, en los últimos 5 años, la matrícula de la



provincia ha caído casi en un 20% y esta representa solo el 1% de la matrícula universitaria del país.

- 4) Agrega que estos niveles de matrícula no permiten que la sede pueda sustentarse, ni cumplir con las directrices del proyecto institucional.
- 5) Por lo anterior en el 2021 la Universidad tuvo que suspender la admisión de estudiantes nuevos para el año 2022, a fin de analizar el futuro de la sede, conformándose una comisión de trabajo integrada por autoridades de la sede y de la casa central, cuyo trabajo se plasmó en un informe que fue analizado por el Consejo Académico Superior y por la Junta Directiva.
- 6) Dice que a lo anterior debe agregarse a) la dificultad de la institución para acceder a campos clínicos para esta sede; b) las dificultades para reforzar el cuerpo académico de la sede, por las razones que indica; c) que los estudiantes de la sede (medidos anualmente en la encuesta de servicios) presentan en los últimos 5 años el promedio de satisfacción más bajo; d) la situación económica que atraviesa el país; e) y los limitados recursos presupuestarios con que cuenta la institución para afrontar sus desafíos y la necesidad y obligación de mantener una administración eficiente de dichos recursos.
- 7) Termina diciendo que todo lo anterior llevó a los órganos colegiados superiores de la institución a concluir que la sede (dado el contexto de la zona y las proyecciones de matrícula) no es sustentable en el mediano plazo y la necesidad de confeccionar un plan de cierre de la sede en Osorno y como consecuencia el término de la relación laboral con la demandante.

CUARTO: Que así las cosas, en la carta de despido el empleador sostiene que ha decidido el cierre de la sede en Osorno de la Universidad, y que dicha decisión ha debido ser adoptada atendido los hechos “*graves, objetivos, reales y permanentes*” que detalla en dicha misiva.

QUINTO: Que en cuanto al cierre de la sede de Osorno, a través de un plan previamente definido que se ha ido ejecutando a través del tiempo; como respecto de las consecuencias de este cierre paulatino (suspensión de matrícula para nuevos estudiantes y despido de otros trabajadores) el demandado ha acompañado abundante prueba documental, consistente en carta de 25 de enero de 2023 (folio 20); cartas de despidos de doña Camila Ignacia González Castillo (folio 21), de don Claudio Sánchez Hidalgo (folio



22), de doña Fabiola Alejandra Velásquez Gómez (folio 23), de doña Gabriela del Pilar Olivares Ramírez (folio 24), de doña Margarita Antonieta Cárcamo Lefian (folio 25), de doña María José Loyola Mansilla (folio 26), de doña Marlis Andrea Bernales Hermosilla (folio 27).

SEXTO: Que sin embargo, respecto de los hechos que se describen en la carta de despido como aquellos que habrían provocado la decisión del empleador demandado de cerrar la sede de Osorno, no se ha rendido prueba suficiente y de una envergadura tal que permita concluir que la Universidad demandada se vio en la necesidad (circunstancia objetiva) de cerrar la sede que mantenía en Osorno.

Resulta útil precisar que para que la causal invocada por el demandado se configure, la decisión de reestructurar la empresa, racionalizarla o modernizarla debe fundarse en hechos objetivos que hagan inevitable el despido de un trabajador, por lo que en el caso de autos, la decisión de cierre de la sede Osorno no puede depender de la sola voluntad del empleador.

En la carta de despido el empleador expone los hechos que tuvo en cuenta al momento de cerrar a la sede, sin embargo la prueba aportada para acreditarlos es insuficiente. En efecto, ha rendido las siguientes probanzas:

- 1) informe que detalla el plan de cierre de la sede de Osorno del año 2023 (folio 19) que da cuenta que *“La Sede de Osorno presentaba una tendencia a la baja de su matrícula, llegando en 2021 a 955 estudiantes matriculados en carreras de pregrado regular. En el contexto del nuevo sistema de acceso universitario, y tal como se apreciaba en el siguiente gráfico, la sede alcanzó un 74% del cumplimiento de sus vacantes, ubicándose bajo el promedio nacional de la Universidad, aun cuando dos de las cuatro carreras que se ofertaban en la sede no presentaban competencia en la provincia”*
“Los análisis desarrollados por la Universidad no proyectan una mejora en el indicador, ya que en los últimos cinco años la matrícula universitaria de la provincia ha caído casi en un 20% y esta representa solo el 1% de la matrícula universitaria del país. Adicionalmente, la otra Universidad de la zona (Universidad de Los Lagos) presenta puntajes de selección muy bajos. Estos niveles de



matrícula no permiten que la sede pueda sustentarse, ni cumplir con directrices del proyecto institucional”.

Se trata de un documento emitido por la propia demandada que no se encuentra respaldado en juicio con otros antecedentes probatorios de consistencia.

- 2) Declaración de los testigos don Carlos Sánchez Salgado y don Alexis Santibáñez Barría, quienes se refieren al plan de cierre más no a los hechos en que la decisión de cierre se fundó._

SEPTIMO: Que estima esta jueza el empleador demandado no ha logrado acreditar los hechos descritos en la carta de despido, por lo que el despido de la demandante será declarado injustificado.

Por lo anterior la demandada deberá pagar a la actora \$7.775.942 por incremento del 30% de la indemnización por años de servicio.

OCTAVO: Que como consecuencia de la declaración antes indicada, el empleador demandado no se encuentra habilitado legalmente para realizar el descuento del aporte patronal de AFC; ello por cuanto el artículo 13 de la ley 19.728 discurre sobre la base de que el contrato de trabajo termine por las causales previstas en el artículo 161 del Código del Trabajo, cuestión que en la especie no ha ocurrido al declararse su falta de justificación.

En efecto, si bien el empleador invocó en la carta de despido como causal de término del contrato la contemplada en el inciso 1° de dicha norma, el trabajador debatió la concurrencia de ella y el tribunal en el presente juicio declarará que dicha causa no se encuentra justificada; por lo que el descuento del aporte patronal de AFC no es procedente y el empleador deberá restituirlo.

Por lo anterior la demandada deberá pagar a la actora \$4.917.666 por descuento del aporte patronal de AFC realizado indebidamente.

NOVENO: Que el resto de la prueba rendida por las partes en nada altera lo ya reflexionado.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 7, 8, 161, 162, 168, 172, 173, 446, 452, 453, 454, 456 y 459 del Código del Trabajo se declara:

Que **SE ACOGE** la demanda interpuesta por doña **VALESKA ANDREA OLGA DELGADO DIOCARES**, en contra de la **UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**, ambos individualizados, declarándose injustificado el despido de que fue objeto la demandante,



ocurrido el 28 de diciembre de 2023, condenándose a la demandada a pagar a la demandante las siguientes prestaciones laborales:

- 1) \$7.775.942 por incremento del 30% de la indemnización por años de servicio;
- 2) \$4.917.666 por descuento del aporte patronal de AFC realizado indebidamente.
- 3) A pagar reajustes e intereses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 del Código del Trabajo;
- 4) A pagar las costas del juicio, regulándose las personales en la suma de \$1.250.000.

Ejecutoriado que sea este fallo y para los efectos del artículo 13 de la ley 14.908 cúmplase por el empleador con la retención de alimentos si ello fuere procedente, debiendo informar al tribunal el hecho de dicho cumplimiento y sus circunstancias, al dar cuenta de pago de las obligaciones establecidas en la presente sentencia.

RIT O-73-2024

Pronunciada por doña María Isabel Palacios Vicencio, Jueza Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de Osorno.

